

NUMERO 51

9ª SESION DE PRORROGA DEL 25 DE OCTUBRE DE 1895

PRESIDENCIA DEL DOCTOR DONCEL

SUMARIO: I—Asuntos entrados.

II—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación, sobre las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, al proyecto de ley estableciendo una lotería nacional.

Señores senadores En Buenos Aires, á los veinticinco días del mes de octubre de mil ochocientos noventa y cinco, reunidos en su sala de sesiones el señor Vice-presidente y los señores senadores al margen consignados, se abre la sesión, con inasistencia del señor Presidente Teniente General Roca, y de los señores Barraza Figueroa (F. C.), Güemes y Gálvez, con aviso.

Leída y aprobada el acta de la anterior, de veintitrés del corriente (8ª de prórroga), se da cuenta de los

Anadón
Aparicio
Barbeito
Benegas
Carbó
Del Pino
De la Fuente
Doncel
Echagüe
Figueroa (B.)
García
Guñazú
Igarzábal
Irigoyen
Mendoza
Mitre
Morón
Pérez
Pellegrini
Tagle
Vidal
Yofre
Zavalía

I

ASUNTOS ENTRADOS

COMUNICACIONES OFICIALES

La honorable Cámara de Diputados, envía en revisión, un proyecto de ley aprobando el contrato *ad referendum*, celebrado entre el Poder Ejecutivo y la empresa del Ferrocarril del Sud, para la prolongación de sus líneas desde Bahía Blanca al Neuquén.

—A la Comisión del Interior.

SOLICITUDES PARTICULARES

Varios cigarreros de la Capital, piden se hagan algunas modificaciones á la ley de patentes para 1896.

—A la Comisión de Presupuesto.

DESPACHO DE COMISIONES

La Comisión de Guerra, se expide en el proyecto de ley en revisión, organizando el ejército permanente y la guardia nacional.

—A la orden del día.

II

Sr. Presidente—Se va á pasar á la consideración del despacho de la Comisión de Legislación, sobre las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, al proyecto de ley estableciendo una lotería nacional.

—Se lee:

Honorable Señor:

Vuestra Comisión de Legislación, ha tomado en consideración las modificaciones introducidas por la honorable Cámara de Diputados, al proyecto de ley que se le pasó en revisión, estableciendo una lotería de beneficencia nacional; y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aceptación, exceptuando la contenida en el artículo 11.

Sala de la Comisión, octubre 22 de 1895.

C. Aparicio — Felipe Yofre —
Leonidas Echagüe.

Buenos Aires, octubre 7 de 1895.

Al señor Presidente del honorable Senado:

La honorable Cámara que presido, ha tenido á bien sancionar, en sesión de la fecha, el proyecto de ley pasado á su revisión por el honorable Senado, incluido en el decreto de prórroga, referente al establecimiento de una lotería de beneficencia nacional, modificándolo en la forma del adjunto.

Dios guarde al señor Presidente,

FRANCISCO ALCOBENDAS.

Juan Oando,
Secretario.

PROYECTO DE LEY DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º.—Se establece una lotería de beneficencia nacional, cuya extracción se hará en la Capital de la República, con sujeción á las bases determinadas en los artículos siguientes:

Art. 2º.—La administración y vigilancia interna de la lotería, queda confiada á una comisión compuesta de seis personas nombradas por el Poder Ejecutivo, cuyos servicios durarán dos años y será renovada por mitad cada año, presidida por un presidente con sueldo.

Art. 3º.—El cargo de miembro de dicha comisión administrativa, será gratuito, e incompatible, para el que desempeñe la presidencia, con todo otro empleo rentado.

Art. 4º.—El sistema que deberá aplicarse, será el de extracción de una cantidad de números de entre otra determinada con anterioridad, para adjudicarles los premios que hayan sido ofrecidos.

Art. 5º.—La comisión fijará anualmente, con aprobación del Poder Ejecutivo, la cantidad destinada á ese objeto, distribuyéndola en la forma que considere más conveniente.

Art. 6º.—En cada lotería deberá asignarse un setenta y cinco por ciento para premios.

Art. 7º.—Los beneficios líquidos que resultasen de las extracciones, serán exclusivamente aplicados, un sesenta por ciento á la construcción y sostenimiento de los hospitales y asilos públicos de la Capital federal, y el cuarenta por ciento restante, por partes iguales, para el mismo objeto en las provincias, el que será distribuido proporcionalmente entre los establecimientos análogos existentes en la capital y departamentos de las mismas.

Art. 8º.—El importe de estos beneficios será entregado por el Poder Ejecutivo:

1º.—En la Capital de la República, á la Intendencia municipal y á las asociaciones ó corporaciones de beneficencia y caridad.

2º.—En las provincias á una junta que se compondrá del intendente municipal, del juez federal y del presidente del Superior Tribunal de Justicia. En donde faltase alguno de estos funcionarios, será suplido por el presidente del Consejo de Educación.

3º.—Unos y otros (en la capital y provincias), administrarán estos fondos, no pudiendo invertirlos en otros objetos que los destinados por la presente ley.

Art. 9º.—Queda prohibida la introducción y venta de toda otra lotería, en la Capital y territorios federales.

Art. 10.—Los infractores á lo dispuesto en el artículo

anterior, pagarán una multa de quinientos pesos, y, en su defecto, sufrirán un arresto de seis meses por cada infracción, y en caso de reincidencia, una y otro conjuntamente.

Art. 11.—Los infractores enumerados en los dos artículos anteriores, quedan excluidos del beneficio acordado por el artículo 376 del Código de Procedimientos en lo criminal.

Art. 12.—Queda prohibido el expendio de billetes en las calles de la Capital.

Art. 13.—Los infractores á lo dispuesto en el artículo anterior, pagarán una multa de cincuenta pesos, ó sufrirán, en su defecto, un arresto de ocho días por cada infracción.

Art. 14.—Los billetes tomados á los infractores, serán decomisados y destruidos el mismo día del secuestro, haciéndose constar, por acta levantada ante escribano público, la lotería de que proceden, fecha de su extracción y la serie y número del billete.

Art. 15.—Las provincias que por medio de sus legislaturas ó municipalidades, autoricen nuevas loterías ó prorroguen los contratos existentes, quedarán excluidas de los beneficios de esta ley.

Art. 16.—El presupuesto de gastos y sueldos del presidente de la comisión y demás empleados de la administración de la lotería, será fijado por la comisión, con aprobación del Poder Ejecutivo, los que serán abonados de los fondos que ella produzca.

Art. 17.—Derógase la ley número dos mil novecientos ochenta y nueve.

Art. 18.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Cámara de Diputados, en Buenos Aires, á 7 de octubre de 1895.

FRANCISCO ALCOBENDAS.

Juan Oando,
Secretario.

PROYECTO DE LEY ORIGINARIO DEL SENADO

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º.—Se establece una lotería de beneficencia nacional, cuya extracción se hará en la Capital de la República, con sujeción á las bases determinadas en los artículos siguientes:

Art. 2º.—La administración y vigilancia interna de la lotería, queda confiada á una comisión compuesta de seis personas, nombradas por el Poder Ejecutivo, cuyos servicios durarán dos años y será renovada por mitad cada año, presidida por un presidente con sueldo.

Art. 3º.—El cargo de miembro de dicha comisión administrativa, será gratuito é incompatible con todo otro empleo rentado.

Art. 4º.—El sistema que deberá aplicarse será el de extracción de una cantidad de números, de entre otra determinada con anterioridad, para adjudicarles los premios que hayan sido ofrecidos.

Art. 5º.—La comisión fijará anualmente, con aprobación del Poder Ejecutivo, la cantidad destinada á ese objeto, distribuyéndola en la forma que considere más conveniente.

Art. 6º.—En cada lotería deberá asignarse un setenta y cinco por ciento para premios.

Art. 7º.—Los beneficios líquidos que resultasen de las extracciones, serán exclusivamente aplicados un sesenta por ciento á la construcción y sostenimiento de los

hospitales y asilos públicos de la Capital Federal; y el cuarenta por ciento restante, por partes iguales, para el mismo objeto en las provincias.

Art. 8º.—El importe de estos beneficios, será entregado por el Poder Ejecutivo á la Municipalidad de la Capital, Sociedad de Beneficencia y Municipalidades de las provincias, quienes administrarán estos fondos, no pudiendo invertirlos en otros objetos que los destinados por esta ley.

Art. 9º.—Queda prohibida la introducción y venta de toda otra lotería en la Capital y territorios federales.

Art. 10.—Los infractores á lo dispuesto en el artículo anterior, pagarán una multa de quinientos pesos, y en su defecto, sufrirán un arresto de seis meses por cada infracción, y en caso de reincidencia, una y otro conjuntamente.

Art. 11.—Queda prohibido el expendio de billetes en las calles de la Capital.

Art. 12.—Los infractores á lo dispuesto en el artículo anterior, pagarán una multa de cincuenta pesos, ó sufrirán, en su defecto, un arresto de ocho días por cada infracción.

Art. 13.—Las penas establecidas en los artículos anteriores, serán aplicadas por la policía, quien procederá de acuerdo á lo establecido en el artículo 184 de la ley de procedimientos criminales de la Capital.

Art. 14.—Los billetes tomados á los infractores, serán decomisados y destruidos, haciéndose constar, por acta levantada ante escribano público, la lotería de que proceden y la serie y número del billete.

Art. 15.—Las provincias que por medio de sus legislaturas ó municipalidades, seis meses después de la promulgación de esta ley, autoricen nuevas loterías ó permitan que se continúen jugando en su territorio las ya autorizadas ó que se concediesen por otras provincias, quedarán excluidas de los beneficios de esta ley.

Art. 16.—El presupuesto de gastos y sueldos del presidente de la comisión y demás empleados de la administración de la lotería, será fijado por la comisión, con aprobación del Poder Ejecutivo, los que serán abonados de los fondos que ella produzca.

Art. 17.—Derógase la ley número 2989.

Art. 18.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, á 11 de junio de 1895.

JULIO A. LOCA.

B. Ocampo,
Secretario.

Sr. Presidente—Está en discusión.

Sr. Aparicio—Pido la palabra.

La Comisión de Legislación, ha estudiado las modificaciones introducidas por la honorable Cámara de Diputados, en el proyecto relativo á la lotería de beneficencia nacional, y aconseja la aprobación de la mayor parte de las reformas introducidas por esa Cámara, excepto la recaída en el artículo 11.

Las enmiendas que ha hecho la Cámara de Diputados, casi todas ellas son de detalle; las que son de más importancia están fundadas en razones que la Comisión cree que son muy aceptables, por

lo cual aconseja al honorable Senado les preste su sanción.

No sucede lo mismo con la contenida en el artículo 11, que la considera de más gravedad: ella se refiere á que los infractores á la ley en discusión, no pueden ser excarcelados bajo fianza, modificando de este modo el artículo 376 del código de procedimientos en lo criminal. Desde que la Cámara de Diputados ha aceptado que los infractores á esta ley sean juzgados por los tribunales ordinarios, es decir, por los correccionales, no hay razón que justifique esta excepción, porque el Senado proponía en su proyecto que los infractores fueran juzgados por la policía.

Creo que no puede aceptarse esta modificación, puesto que el artículo citado concede estos beneficios á los delincuentes que merecen una pena hasta de dos años, y esta ley no establece sino seis meses para los infractores, por lo cual no creo justificada la excepción á que me refiero, pues, de antemano, serían penados por ella los delincuentes.

La excarcelación bajo fianza se concede durante el proceso, y si éste durase tres, cuatro ó seis meses, como sucede generalmente, y después de concluido resultara inocente el acusado, tendríamos que ha sufrido la pena antes de ser condenado.

La pena principal, la que impone esta ley, es de quinientos pesos, y á un individuo que es arrestado por haberla infringido y da fianza de una cantidad mayor de quinientos pesos, no puede mantenerse en prisión preventiva, puesto que asegura con la fianza, el cumplimiento de la pena á que pueda ser condenado.

Por esta razón, la Comisión cree que no debe ser aceptado el artículo, pues no hay fundamento que justifique esta excepción, única que se haría al artículo sobre excarcelación.

Además, esta disposición sobre excarcelación, es de gran importancia para los procesados; no se ha establecido excepción en ningún caso, sino en el presente.

Tratándose de una infracción que no es grave, que no es un delito, cree la Comisión que no debe ser aceptada esta modificación.

Sr. Presidente — Se va á votar cada una de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.

Sr. Igarzábal—Me parece que cada modificación la debemos discutir especialmente, porque no cabe discusión en globo.

Sr. Presidente — Así es, señor senador.

—Se lee :

Artículo 3º El cargo de miembro de dicha Comisión administrativa, será gratuito é incompatible, para el que desempeñe la presidencia, con todo otro empleo rentado.

Sr. Secretario—La modificación consiste en estas palabras: «para el que desempeñe la presidencia.»

Sr. Pellegrini—La incompatibilidad es sólo para el presidente.

Sr. Aparicio—Porque es el único que tiene empleo rentado; los demás son honorarios.

—Se vota si se acepta la modificación, y resulta afirmativa.

—Se lee:

Art. 7º Los beneficios líquidos que resultasen de las extracciones, serán exclusivamente aplicados, un sesenta por ciento á la construcción y sostenimiento de los hospitales y asilos públicos de la Capital Federal, y el cuarenta por ciento restante, por partes iguales, para el mismo objeto en las provincias, el que será distribuido proporcionalmente, entre los establecimientos análogos existentes en la capital y departamentos de las mismas.

Sr. Secretario—Ha agregado la Cámara de Diputados: «el que será distribuido proporcionalmente, entre los establecimientos análogos existentes en la Capital y departamentos de las mismas.»

Sr. Presidente—Está en discusión.

Sr. Guñazú—Pido la palabra.

Estoy de acuerdo con la modificación hecha en este artículo por la Cámara de Diputados, pero encuentro cierta vaguedad, en la parte que se refiere á la distribución proporcional, que debe hacer la comisión que crea el artículo 8º siguiente, en cada provincia.

Esta proporción, señor Presidente, puede ser, ó bien en relación con el número de establecimientos que haya en todo el territorio de las provincias, ó

bien con las necesidades de cada establecimiento.

Yo entiendo que es el último criterio, es la última norma, es decir, la necesidad de cada establecimiento, lo que ha influido en el ánimo de la Comisión para la distribución.

Así, por ejemplo, en Mendoza, hay un hospital general en la capital de la provincia y otro en un departamento próximo.

Desde luego, salta á la vista que las necesidades de uno y otro de estos establecimientos, no pueden ser las mismas, y por lo tanto, estos dos establecimientos no han de tener derecho á una cuota igual.

Y lo que pasa en Mendoza, pasa seguramente en otras provincias.

Yo deseo conocer el pensamiento de la Comisión, á objeto simplemente, de dejar establecida la verdadera inteligencia de esta parte del artículo.

Sr. Aparicio—La mente del artículo es que la distribución sea según las necesidades de cada establecimiento. Como en la mayor parte de las capitales de provincia, hay sociedades de beneficencia y asilos, lo que no sucede en los departamentos, la comisión, con criterio propio, debe distribuir esta cantidad; se entiende, repito, según las necesidades de cada establecimiento.

Esa es la mente de la Comisión.

Sr. Pellegrini—Pido la palabra.

Creo que va á ser difícil aplicar esto. Primeramente queda excluida toda construcción de un nuevo asilo, porque dice: «el que será distribuido proporcionalmente, entre los establecimientos análogos existentes.....»

« Los beneficios líquidos que resultasen de las extracciones, serán exclusivamente aplicados, un sesenta por ciento á la construcción y sostenimiento de los hospitales y asilos públicos de la capital federal, y el cuarenta por ciento restante, por partes iguales, para el mismo objeto en las provincias. » Esto es lo que disponía la Cámara de Senadores. Y este agregado importa declarar que deben destinarse exclusivamente á ser distribuidos entre los actualmente existentes,—lo que sería contrario al espíritu de la ley.

Además, es muy difícil decir propor-

cionalmente. La construcción de un edificio necesita mucho más, que el simple sostenimiento de otro. Si mañana hay necesidad de dar ensanche á los hospitales actuales, tendrían muchas mayores necesidades esos hospitales. Pueden ser necesarios todos esos fondos, para la construcción de un nuevo asilo.—Esto corresponde á la discreción de la comisión de administración, que es de mucha responsabilidad.

Así es que yo voy á votar en contra de la agregación. Se entrega, por otro artículo, al juez federal, al presidente del tribunal de justicia y al intendente municipal, esa distribución, y ellos son los que han de apreciar la forma en que se puede distribuir esos fondos, mejor que lo que puede hacerlo la ley.

Quitándole la palabra *existentes*, creo que quedaría bien.

Yo se la suprimiría y dejaría que la comisión nombrada distribuyera esos fondos, con arreglo á las necesidades. Sé que hay algunas provincias en que se está gestionando la construcción de nuevos hospitales, y que se piensa hacerlos exclusivamente con los fondos de la lotería municipal; y con este artículo no lo podrían hacer.

Sr. Yofre—La Comisión está de acuerdo con el pensamiento que acaba de expresar el señor senador por Buenos Aires; pero al ocuparse del artículo original y de la enmienda introducida por la Cámara de Diputados, tuvo en cuenta la gran mayoría de opinión que había en favor de ella, es decir, de una comisión para distribuir los fondos, y temía, si la rechazaba, que la Cámara insistiera. En el fondo los dos artículos dicen lo mismo; el de la Cámara es más reglamentario; pero si el señor senador insiste en esto, la Comisión no tiene inconveniente en acceder al rechazo.

Sr. Pellegrini—Yo creo que la palabra *existentes*, es inadmisibles.

Sr. Yofre—Esa palabra podría referirse, no á lo que existe, sino á lo que pueda existir.

Sr. Pellegrini—Existente, es lo que ya existe; no lo que existe en potencia ó virtualmente, como se dice en filosofía.

Sr. Yofre—La Comisión no tiene inconveniente en acceder á la supresión de esa palabra; pero me parece que la

Cámara insistirá, y tendremos que reconsiderar nuevamente el proyecto.

Sr. Pellegrini—Quién sabe; estas enmiendas se introducen muchas veces sin mayor discernimiento, y en una sanción más meditada, se ven los inconvenientes de la impremeditación, como en este caso, en que son evidentes los perjuicios y contrariedades que esa enmienda puede oponer á los propósitos de la ley.

Las mismas consideraciones que se están haciendo ahora, pueden influir para modificar el juicio de la otra Cámara.

Sr. Aparicio—Creo que aceptando la supresión propuesta, todo queda arreglado.

Sr. Pellegrini—Se puede votar por partes.

Sr. Pérez—No se puede votar por partes, porque se trata de insistir ó no en las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.

Sr. Pellegrini—En este caso no se trata de la insistencia, sino de si se aceptan ó no las enmiendas.

Sr. Echagüe—Que se vote por partes.

Sr. Presidente—Se va á votar si se acepta la enmienda de la Cámara de Diputados, con excepción de la palabra *existentes*, que se votará en seguida.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente—Se va á votar si se acepta ó no la palabra *existentes*.

—Se vota y resulta negativa.

Sr. Secretario Ocampo—El artículo 8º sancionado por el Senado, dice:

El importe de estos beneficios, será entregado por el Poder Ejecutivo á la Municipalidad de la Capital, Sociedad de Beneficencia y Municipalidades de las provincias, quienes administrarán estos fondos, no pudiendo invertirlas en otros objetos que los destinados por esta ley.

El de la Cámara de Diputados dice:

El importe de estos beneficios será entregado por el P. E.:

1º—En la Capital de la República, á la Intendencia Municipal y á las asociaciones ó corporaciones de beneficencia y caridad.

2º—En las provincias, á una junta que se compondrá del Intendente Municipal, del Juez Federal y del Presidente del Superior Tribunal de Justicia. En donde faltase alguno de estos funcionarios, será suplido por el Presidente del Consejo de Educación.

3º—Unos y otros (en la Capital y Provincias) administrarán estos fondos, no pudiendo invertirlos en otros objetos que los destinados por la presente ley.

Sr. Igarzábal—Pido la palabra.

Yo voy á votar en contra, señor Presidente, de la modificación fundamental que la Cámara de Diputados ha hecho en el artículo 8º del proyecto del Senado.

Esa modificación consiste, en que en la Capital de la República, por excepción lo que la misma Cámara acepta para todas las provincias, en la Capital de la República, digo, se entreguen los fondos, no á la Municipalidad, sino al Intendente, para que éste haga, según su juicio, la inversión de ellos.

Yo digo, que esta modificación es inaceptable, porque es contra la carta orgánica de la Municipalidad, contra la constitución del gobierno local de la Capital.

Quiero llamar la atención de la honorable Cámara, sobre el carácter especial de la ley que organiza la Municipalidad de la Capital.

Esta ley no es, señor Presidente, como cualquiera de las leyes generales que el Congreso puede dictar; el Poder Legislativo de la Nación, ha recibido por la Constitución general, el poder, según el artículo 3º, de dotar á la República de una Capital, por medio de una ley especial; *especial* es el calificativo que le da la Constitución, y cuando ella, en el inciso 14 del artículo 67, habla de la ley que el Congreso debe dictar para organizar los territorios nacionales, le da otra vez el nombre de ley especial. Esto quiere decir, señor Presidente, que en el sentir de la Constitución, estas leyes de organización del gobierno de los territorios y de esta Capital, son leyes de carácter constitucional, porque son leyes constitutivas de un gobierno, aunque desde que el Congreso tiene la facultad de dictarlas él tenga también la de modificarlas.

Yo no negaré que si la ley orgánica de la Municipalidad de la Capital, atribuye á la Municipalidad todo lo relativo á las loterías, el Congreso puede dictar otra ley especial, modificando la organización de la Municipalidad y atribuyendo esto al gobierno general; pero estando vigente la ley constitutiva de esa Municipalidad, me parece muy impropio, muy irregular,

que por medio de una ley de esta naturaleza, que es una ley de circunstancias, dire así, el Congreso venga á introducir una innovación ó á cambiar las facultades que constitucionalmente ha atribuido á la Municipalidad: es decir, á la Intendencia y al Concejo deliberante, que son las dos autoridades que constituyen el gobierno local.

Además, yo pregunto, señor Presidente: esta modificación está justificada por alguna consideración?

Cuando la honorable Cámara de Diputados discutía este asunto, y noté que se hacía esto, yo buscaba las razones, y digo con franqueza, que no encontré ninguna.

Desde luego, y sin que importe deprimir en lo más mínimo los gobiernos municipales que en otras ocasiones ha tenido la ciudad de Buenos Aires, puede decirse bien claro, que la municipalidad actual es la mejor, porque en ella se reúnen circunstancias especiales que no ha tenido ninguna de las anteriores: es una municipalidad libremente elegida por el pueblo habiendo sido ésto reconocido por todos los partidos políticos; es una corporación que cuenta en su seno muchísimas personas de alta respetabilidad, y en cuanto á ilustración, sabemos por las discusiones que se publican frecuentemente, que es una corporación á la altura de su misión y por último, que no le cedería á ninguna en actividad y en celo para defender los intereses que le están confiados.

Y yo digo, señor Presidente, cuando el Concejo Municipal no ha dado motivo alguno para que se dude de su acierto en la inversión de los dineros públicos, ¿por qué, quitarle, violando la carta orgánica dictada por el mismo Congreso, la facultad que tiene de vigilar la inversión de los caudales municipales?

¿Acaso por esta misma ley, el 60 % del producto de la lotería, no se declara que es renta municipal?

¿Cuál es la causa, pues, señor Presidente, de que el Concejo Municipal de la Capital, no merezca la confianza del Congreso?

Yo no la encuentro, y en lo que trae este proyecto, en lo que está estatuido en él, no encuentro sino una violación de los principios elementales de

todo buen gobierno y de toda buena administración, porque, cuando se trata del 60% del producto de la lotería, se trata de millones á invertir por año, en los establecimientos de beneficencia de la Capital, y no habrá quien pueda demostrar, que el Intendente, una sola persona, tiene mejor criterio para saber cuáles son las necesidades de este municipio, y hacer una mejor aplicación de esa renta que todo el municipio mismo, representado por su Concejo Deliberante.

A mí me parece, que bajo esta faz no se habrá considerado esta cuestión, y por eso se ha creído sencillo privar á la ciudad de Buenos Aires, de la facultad de estudiar sus propias necesidades y de aplicar á ellas los fondos que produjera el 60% de la lotería.

Y como considero que esta reforma que hace la Cámara de Diputados, importa una violación de la carta municipal, que el Congreso debe ser el primero en respetar, mientras el Congreso mismo, que es quien tiene la facultad de hacer las modificaciones de esa carta, no electúe dicha modificación en la forma que corresponde; como entiendo, señor Presidente, que el Concejo Deliberante, no sería menos acertado que el Intendente de la Capital, para hacer la inversión de estos fondos, tanto más cuanto que al decirse ó sostenerse, como yo sostengo, que deben entregarse á la Municipalidad, se entiende que se entregan al Intendente y Concejo Deliberante, para que, con arreglo á la carta orgánica, procedan á la aplicación de ellos, voy á votar en contra de la modificación que la honorable Cámara de Diputados ha introducido, en la parte fundamental del artículo del Senado.

Diré entonces que acepto todo el artículo 8º, tal cual viene sancionado, menos la palabra *intendencia*, porque esto es lo que quita á la municipalidad, las facultades á que me he referido, dándolas exclusivamente al Intendente.

Si el inciso 1º quedara de esta manera: «En la Capital de la República, á la Municipalidad, y á las asociaciones y corporaciones, etc.», quedaría perfectamente bien, y entonces yo le prestaría mi voto á los incisos 2º y 3º.

Concluiré, señor Presidente, estas bre-

ves palabras, haciendo notar la inconveniencia de que, en las provincias, la mínima parte que á ellas se destina, sea administrada por una comisión de personas respetables, incluso el intendente, municipal, y que en la Capital de la República, tratándose de la administración de valores mucho mayores, no se dé la administración al Concejo Deliberante y al Intendente, sino á este con exclusión de aquel.

Me parece ésto una anomalía, que no puede ser explicada satisfactoriamente, á menos que el Congreso de la Nación, tenga razones para creer que la intervención del Concejo Deliberante de la Capital, en la administración de la lotería, no dé buenos resultados.

He dicho.

Sr. Aparicio—Pido la palabra.

Como esta es una ley especial, que trata de la distribución de los beneficios que produce la lotería, creo que es facultativo del Congreso, encargar de su ejecución á las autoridades y personas que le parezca conveniente.

Los antecedentes de este asunto, los expondré á la Cámara, para que tenga en cuenta cuáles son los motivos por qué se ha encargado esto al Intendente y no al Concejo Deliberante.

En el estado actual, al aplicar la ley de lotería, se ha visto que ha habido cuestiones entre el Intendente y el Concejo Deliberante.

Entonces, pues, para que desaparezcan esas dificultades, se cree conveniente encargar esto sólo al Intendente, puesto que se trata simplemente de la ejecución de una ley nacional, cuyo cumplimiento puede ser encargado por el Congreso á quien le parezca conveniente, no estando obligado á designar al Concejo Deliberante.

Un intendente es una persona respetable, nombrada por el Poder Ejecutivo, y la Comisión ha creído conveniente encargar á ese funcionario, de la distribución de los beneficios que produzca la lotería nacional.

En esto me parece que no hay dificultad, porque la ley especial á que se ha referido el señor senador, es relativa á la organización de la municipalidad; pero, esta es una ley, como he dicho, nacional, especial; así es que pue-

de encomendarse su ejecución á cualquier persona ó autoridad, sin menoscabo de otras.

Por esta razón es que la Comisión no ha hecho cuestión de esta modificación, introducida por la Cámara de Diputados.

Sr. Igarzábal — Pido la palabra.

Las razones que el miembro informante de la Comisión da para fundar la aprobación que ella presta á esta modificación de la Cámara de Diputados, me parece que no tienen bastante fundamento.

El conflicto que el señor senador dice que se quiere salvar, es un conflicto, señor Presidente, que ha surgido por el decreto del Gobierno Nacional, violatorio de la ley del Congreso.

La ley que tratamos de modificar, dice que los fondos se entregarán á la Municipalidad; que la Municipalidad sorteará una lotería. El decreto del Ejecutivo que reglamentaba esta ley, decía, señor, que lo haría el Intendente.

De manera que, cuando el Concejo Deliberante ha pedido la intervención que creía corresponderle, la ha pedido, respetando precisamente la ley del Congreso, dentro de las facultades que esa ley le daba. Si el conflicto habido ha sido serio, ha sido promovido por el Poder Ejecutivo Nacional; por un decreto ilegal; por un decreto contrario completamente á los términos de la ley de lotería dictada por el Congreso. Si la ley que se dicta ahora es clara, es terminante; si no deja lugar á que el Poder Ejecutivo vuelva á torcer su espíritu, como lo torció con el decreto á que me acabo de referir, puede estar seguro el miembro informante, que no habrá conflicto alguno, porque el Concejo Deliberante, señor, es ante todo respetuoso de las leyes, y si ha provocado eso que se llama conflicto, ha sido precisamente defendiendo una prerrogativa que creía que la ley del Congreso le había dado.

Sr. Yofre—Pido la palabra.

Señor Presidente: la Comisión no ha creído que al aconsejar la aceptación de la reforma propuesta por la Cámara de Diputados, comprometía ni principios constitucionales, ni la carta orgánica de las municipalidades, ni afectaba las altas funciones que desempeña el Concejo

Deliberante, ni censuraba su composición, ni, en manera alguna, afectaba los fueros de este municipio, sino que simplemente, aconsejaba la aceptación de una reforma que tiene perfecto derecho para establecer el Congreso, y en nada menoscaba las atribuciones de la Municipalidad.

Así es que, en mi concepto, el señor senador por la Capital, se ha alarmado sin motivo ha magnificado el asunto, y nos ha hecho oír un discurso, que trae á la memoria la célebre defensa del no menos célebre Padilla, sobre los fueros comunales de algunas provincias de la España.

Esta es una ley como tantas otras, que el Congreso dicta dentro de sus facultades, tendente á promover intereses de un orden general.

La ley de subvenciones á la instrucción primaria, ha establecido, por uno de sus artículos, que la distribución de los fondos, que da la Nación, se haga por medio de comisiones especiales en cada provincia, y que las provincias que se acojan á esa ley, han de admitir la fiscalización de la inversión de esos fondos, hecha por un representante del Concejo nacional de Educación; y nadie ha de creer, que esta disposición afecte la soberanía y los fueros federales de esos estados, ni que implique un espíritu de desconfianza para los poderes públicos de las provincias.

Este precedente hace ver, que el Congreso ha podido muy bien nombrar comisiones especiales en este caso, sin afectar en nada la prerrogativa de los municipios, ó de las provincias.

Motivos de orden administrativo, son los que han influido en la Cámara de Diputados, para promover esta reforma, creyendo de esta manera controlar mejor la inversión de estos fondos, y como regla uniforme, establece que en la Capital se entregarán estos fondos al Intendente.

Sr. Igarzábal — Precisamente de eso me estoy quejando, que no se trate á la Capital de la República, lo mismo que á las provincias.

A las provincias se les entrega los fondos, bajo la fiscalización de una comisión de funcionarios respetables, dejando de lado al intendente, y en la Capital

se entrega todo al intendente, dejando de lado al Concejo Deliberante: y se procede á la inversa.

Sr. Yofre—El inciso 2º dice: que se entregará al Intendente municipal, y si hay alguna diferencia, es en favor del Intendente municipal, porque no se le hace fiscalizar por los funcionarios que en las provincias deben hacer esta fiscalización. Voy más allá en este orden de ideas: al establecer este artículo que estos fondos serán entregados á la Intendencia municipal en la Capital, la Comisión ha entendido que la Intendencia haría la aplicación de ellos, de conformidad con los mismos presupuestos que vote el Concejo Deliberante municipal.

El Concejo Deliberante municipal, al formar sus presupuestos, tiene en cuenta estos recursos con que contribuye la Nación y los distribuye en ellos. Así está calculado el presupuesto de la Municipalidad de la Capital, para el corriente año y para el venidero.

Hace la indicación de la forma en que han de ser aplicados estos recursos; así es que dada esta organización del presupuesto municipal que tiene la Capital de la República, la Comisión ha creído que al recibir el Intendente estos fondos, tenía que aplicarlos de conformidad á la distribución que el Concejo Deliberante haga de estos recursos. No ha pensado de ninguna manera que la Intendencia municipal, aplicase *ad libitum* y sin control de ninguna clase, estos fondos.

Esta ha sido la manera cómo la Comisión ha entendido la reforma.

Tanto se ha dicho del modo como en algunas provincias se aplicaban estos fondos, que la Comisión ha creído prudente aceptar esta enmienda de la Cámara de Diputados, sin que esto importe una diferencia radical entre uno y otro artículo, es decir, entre el artículo primitivo del Senado y el artículo de la Cámara de Diputados.

Explicado así el propósito con que la Comisión aconseja la aceptación de esta enmienda, se ve que no hay motivo de alarma, y el Senado podrá resolver lo que le parezca. Si insiste en el primitivo artículo, perfectamente; si acepta este, también, por ser meramente reglamentario; pero la reforma no tiene re-

pito, el alcance que el señor senador le ha atribuido, de que el Concejo deliberante no pueda distribuir estos fondos de la manera que entienda más conveniente.

A alguna persona debe hacerse la entrega de estos fondos; la entrega material debe hacerse al Intendente municipal, no puede hacerse á una corporación.

Sr. Igarzábal—¿Ha concluido el señor senador?

Sr. Yofre—No debo decir más, porque basta para expresar el propósito que se ha tenido, al aceptar este artículo por parte de la Comisión.

Sr. Igarzábal—Yo me felicito de que la Comisión esté completamente de acuerdo conmigo, en cuanto á la conveniencia de que estos fondos sean administrados por la Municipalidad, es decir, por el Concejo Deliberante, sancionando la ordenanza respectiva sobre la inversión de estos recursos, y por el Intendente, que colabora en la sanción de las ordenanzas. De manera que en el fondo, estamos de acuerdo con la Comisión; siendo esto así, ella debía convenir conmigo, en la pequeña modificación que indico. Me parece que así quedaría mejor explicado en este artículo, todo el pensamiento que tuvo el Senado, al sancionar el artículo del proyecto que ha modificado la Cámara de Diputados.

Simplemente yo pediría que al votar el inciso 1º, insistamos en la palabra Municipalidad, no aceptando la palabra Intendencia. Es cuestión de una palabra solamente.

Sr. Yofre—Perfectamenté, no tenemos inconveniente; suponemos que el Intendente siempre recibirá los fondos á pesar de esa modificación.

Sr. Igarzábal—Indudablemente el Intendente es quien recibe todas las rentas municipales; es el Poder Ejecutivo.

Entonces, el inciso 1º dirá: «En la capital de la República, á la Municipalidad y á las asociaciones ó corporaciones de beneficencia y caridad.»

De manera que lo que yo pido es simplemente que el Senado no acepte la modificación de la palabra *Municipalidad*, que ha hecho la Cámara de Diputados en el proyecto del Senado.

Sr. Presidente—Debo observar al señor senador que, según el reglamento,

la Cámara no puede modificar la redacción de la modificación introducida por la Cámara de Diputados.

Sr. Mitre—En el artículo anterior.

Sr. Igarzábal—Se acepta la modificación, excepto una palabra.

Sr. Presidente—El señor senador propone modificar la redacción.

Sr. Mitre—Mantener la anterior.

Sr. Igarzábal—Mantener la palabra «Municipalidad» del artículo del Senado, que dice «que el importe de estos beneficios, será entregado por el Poder Ejecutivo á la Municipalidad». Sin embargo, aun dentro de las ideas que indica el señor Presidente, creo que podemos aceptar la modificación de la Cámara de Diputados, porque rehusando aprobar la palabra *Intendencia*, se habrá conciliado todo.

Sr. Yofre—El Senado, dentro de la Constitución, no tiene facultad para hacer enmiendas á enmiendas y debe limitarse á insistir ó no insistir. Por consiguiente, en este caso podríamos insistir en la primitiva sanción del Senado.

Sr. Presidente—Yo creía que tenía el deber de hacer esta observación al señor senador por la Capital, porque puesto á votación el inciso 1º, si fuera rechazado y aceptados después los siguientes incisos, el artículo quedaría incompleto, sin expresar el pensamiento. De manera que la Cámara tiene que aceptar estos incisos á la vez, ó rechazarlos.

Sr. Igarzábal—Puede aceptar los tres incisos, menos la palabra «Intendencia». Yo propongo que se vote por partes.

Sr. Yofre—No podemos hacer eso. Es inconstitucional el procedimiento que indica el señor senador. En un proyecto originado en el Senado, que pasa á la Cámara de Diputados y vuelve al Senado en grado de revisión, éste no puede sino aceptar las enmiendas ó insistir en su primitiva sanción; pero no puede hacer enmiendas á las enmiendas propuestas por la Cámara de Diputados.

Sr. Igarzábal—Tiene muchísima razón el señor senador, pero no se trata aquí de una enmienda á la enmienda de la Cámara de Diputados, sino simplemente de que se vote por partes, y que cuando lleguemos á la palabra «Intendencia», el Senado la rechace, lo que importaría insistir en la palabra «Muni-

cipalidad», que está consignada en el artículo sancionado primitivamente por el Senado.

Sr. Yofre—Entonces, mantengamos la primitiva sanción.

Sr. Igarzábal—El artículo queda mejor dividido en incisos.

Sr. Aparicio—Me parece que las explicaciones que se acaban de dar, serán suficientes para fijar el alcance de este artículo.

Sr. Igarzábal—Perdóneme el señor senador que le diga que no me es posible aceptar, porque el conflicto que existió entre la Municipalidad y la Intendencia, ha sido precisamente por los términos de un decreto del Poder Ejecutivo, que decía «*entréguese al Intendente*», y que era violatorio de la ley, que decía «*entréguese á la Municipalidad*».

Si por esto ha habido cuestiones, con mayor razón podrá haberlas diciendo la ley «*entréguese al Intendente*»; porque entonces se puede asegurar que no le dará ninguna intervención al Concejo Deliberante, y quedaría así sancionado lo que se ha querido corregir con esta ley á saber, la violación que de la anterior había hecho el Poder Ejecutivo, con su decreto ilegal.

Sr. Aparicio—Pero, se tendría en cuenta esta explicación.

Sr. Igarzábal—Desde que la Comisión está de acuerdo, porque interpretamos de la misma manera que el señor senador por Córdoba, ¿por qué no votar por partes?

Sr. Aparicio—Votemos, entonces.

Sr. Presidente—Se va á votar si se acepta la modificación introducida por la Cámara de Diputados, con excepción de las palabras «á la Intendencia municipal».

—Se vota en esa forma y resulta afirmativa.

Sr. Presidente—Se va á votar si se substituyen las palabras *Intendencia municipal* por la palabra *Municipalidad*.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo II.

Sr. Presidente—Se va á votar este artículo nuevo, sancionado por la Cámara de Diputados.

—Se vota y es rechazado.

—Se lee el artículo 14.

Sr. Secretario Ocampo—La modificación consiste en agregar, después de las palabras *decomisados y destruidos*, las siguientes: *el mismo día del secuestro*; y después de *la lotería de que procede*, «fecha de la extracción».

—Se votan estas modificaciones y se aprueban.

—En seguida se vota si se aprueba la introducida en el artículo 15, y resulta afirmativa.

Sr. Presidente—Ha concluido la consideración de la orden del día.

Se ha recibido en la secretaría un pliego reservado del Poder Ejecutivo, que debe leerse en sesión secreta.

Queda levantada la sesión pública.

—Eran las 4.10 p. m.

ANGEL MENCHACA.

Director de taquígrafos.